CAPÍTULO VII

Los desafíos de la movilidad humana ambiental bajo el enfoque de derecho humano al desarrollo.

Autores:

Dra. Ana Paola Román Hernández

Dra. María Teresa Montalvo Romero

Resumen

El capítulo tiene como propósito abordar los principales desafíos que implica la movilidad humana en el contexto de los impactos adversos del cambio climático bajo el enfoque del derecho humano al desarrollo, en especial desde la perspectiva de los vacíos legales y operativos existentes a nivel institucional en México y en el mundo.

La metodología utilizada, además de la revisión bibliográfica, es el análisis documental examinando algunos marcos e iniciativas internacionales, prácticas eficaces y algunos retos en relación con el fenómeno multidimensional de la movilidad humana por cuestiones ambientales, con la finalidad de promover en México medidas de protección internacional, que permitan la inclusión de buenas prácticas en el marco jurídico normativo, así como una reformulación del término refugiado, que contemple la esfera ambiental.

El objetivo es establecer la vinculación existente entre la aplicación del modelo de desarrollo con el surgimiento de fenómenos como el cambio climático y los refugiados ambientales.

El esquema del capítulo se encuentra estructurado en cuatro secciones, la primera hace referencia a la visión general sobre el desarrollo como derecho humano, la segunda analiza la interdependencia de los derechos humanos y el derecho humano al desarrollo, la tercera presenta los desafíos que ha enfrentado la región latinoamericana con relación a la movilidad humana ambiental y, por último, la última sección presenta los desafíos de México al referirse a los refugiados ambientales.

Palabras clave: Desarrollo, refugiados ambientales, cambio climático, movilidad humana.

1. Introducción

Es un hecho que, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo comienza a concebirse como crecimiento económico, orientándose hacia el logro de un acelerado desarrollo industrial y tecnológico; a este paradigma se le llamó "desarrollista", el mismo ha acarreado negativas consecuencias para la humanidad relacionadas con el incremento del deterioro de las condiciones ambientales del planeta y los diferentes sistemas biofísicos y sociales que lo constituyen; lo cual ha desencadenado la llamada crisis ambiental.

Como resultado de esta crisis ambiental, en la década de 1960, la humanidad comienza a cuestionarse este paradigma de desarrollo que contiene altos costos sociales, económicos, culturales y ambientales vinculados al consumo y manejo irracional e indiscriminado de los recursos del medio, generando una serie de fenómenos como cambio climático y por ende refugiados ambientales. Como bien lo señala Mañán (2010:8) "luego de medio siglo de pensamiento *desarrollista* y prácticas políticas acordes, las condiciones

generales de vida de las poblaciones de los países subdesarrollados no han cambiado y el porvenir resulta un desafío inevitable y de grandes dimensiones”.

Derivado de este panorama, los refugiados ambientales se convierten en un fenómeno que hace visible las consecuencias de este modelo de desarrollo sobre las vidas humanas, al forzar a las personas a desplazarse de sus lugares de origen de manera temporal o permanente porque la situación en sus países se vuelve insostenible, motivo por el cual los Estados se enfrentan a una serie de desafíos para poder solucionar este fenómeno.

2. Evolución: del desarrollo al desarrollo como derecho humano

Sin duda hablar del concepto desarrollo nos conlleva a situarnos en un debate sobre el concepto polisémico, puesto que en aras del desarrollo el reordenamiento mundial que se llevó cabo después de finalizar la II Guerra Mundial, supuso que era necesario llevar a cabo un modelo que permitiera atenuar la desigualdad existente entre los países, estableciéndose así una brecha que dividió a los países en desarrollados y subdesarrollados y que catalogó a América Latina, Asia y África como el Tercer Mundo. “Históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de un nuevo modelo de relaciones Norte-Sur que relevó las viejas relaciones coloniales, se empezó a dividir al mundo en países desarrollados y otros subdesarrollados” (Lang, 2012:13).

Las teorías de desarrollo¹⁰ que sucedieron a lo largo de la historia de la humanidad han transitado por diversas etapas:

A través de la historia, este término ha sido objeto de diversas acepciones en cuanto a sus implicaciones para los seres humanos, por lo que se considera que aún no tiene una definición única. Durante la segunda mitad del siglo XX, el “desarrollo de los seres humanos”, en su concepción moderna, fue definido bajo un enfoque de enriquecimiento material, es decir, como producto del incremento de los bienes y servicios que poseía y gozaba una persona. En cambio, durante los años setenta y ochenta del siglo pasado, el concepto de desarrollo tomó una dimensión más humanista y pasó a entenderse como un proceso de ampliación de las capacidades personales más que como un aumento meramente económico, es decir, la noción se centró en la creación del ambiente propicio para mejorar los diversos aspectos de la vida humana, tanto de manera individual como colectiva (CNDH, 2016, p.7).

Para fines de este capítulo nos centraremos en el desarrollo visto desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Inicialmente, el derecho al desarrollo de acuerdo con el Relator de las Naciones Unidas (2018):

se mencionó por primera vez como un derecho específico en 1966, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Senegal, Doudou Thiam, se refirió a él en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Thiam vinculó el incumplimiento de los

¹⁰ Nos referimos a las teorías modernizadora, de la dependencia, enfoque de las necesidades básicas y la visión del desarrollo a escala humana, crítica al desarrollo, neoliberal y neo modernizadora.

objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas con el fracaso de los nuevos Estados descolonizados a la hora de resolver el desequilibrio económico creciente entre los mundos en desarrollo y desarrollados. Los fundamentos del derecho, sin embargo, se remontan incluso más allá de la declaración de Thiam: se encuentran en los artículos 1, 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas. Estos artículos establecen que las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones requieren condiciones de estabilidad y bienestar, palabras que subrayan claramente la importancia del derecho al desarrollo. La Carta también prohíbe la discriminación y encomienda a las Naciones Unidas que promuevan, entre otras, un nivel de vida más elevado, el pleno empleo, las condiciones de progreso y desarrollo económico y social, así como el respeto universal de los derechos humanos (United Nations Human Rights, 2018, p.5)

Además, es importante subrayar que “en el marco del debate entre las teorías modernizadora y de la dependencia emergió la idea del derecho humano al desarrollo. En la Primera Conferencia sobre comercio y Desarrollo de 1964” (Jongitud y Montalvo, 2020, p.52).

Posteriormente, el derecho al desarrollo encontró su fundamento jurídico en la Declaración sobre el Derecho al desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/ 128, del 4 de diciembre de 1986, la cual define al desarrollo, en su artículo 1, de la siguiente manera:

- a) El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
- b) El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

Jongitud (2001), refiere que a partir de esta Declaración el principal responsable del Derecho al Desarrollo es el Estado, a quien le corresponde crear las condiciones favorables para el desarrollo de los pueblos y de los individuos (p.217).

En este contexto, es importante enfatizar que el surgimiento del derecho al desarrollo comprometió a la comunidad internacional a enfocar sus esfuerzos para la adopción en el año 2000, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)¹¹, mismos que buscaban combatir problemas globales como pobreza, educación, salud materna, la igualdad de género, la reducción de la mortalidad infantil, el combate a las enfermedades, la sostenibilidad ambiental y el fomento a una alianza mundial para hacer realidad el desarrollo, no obstante

¹¹ Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/55/2 Declaración del Milenio. Aprobada durante el quincuagésimo quinto período de sesiones: Nueva York, Naciones Unidas, 08 de septiembre de 2000

“ su incipiente seguimiento e implementación no lograron su consecución... pero reconocieron las repercusiones que el modelo neoliberal y el acelerado proceso globalizante habían propiciado en el ámbito nacional e internacional” (Landa y Román, 2021, p.52).

A partir del no cumplimiento de esos objetivos, el 21 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se ha convertido en un parteaguas puesto que representa uno de los acuerdos globales más ambiciosos y trascendentales en la historia reciente (Mayor, 2019, p.5), para hacer frente a los desafíos globales de desarrollo.

3. La interdependencia de los derechos humanos y el derecho humano al desarrollo en México

En el apartado anterior ya establecimos que el derecho al desarrollo consiste en promover y proteger la capacidad de cada persona para participar en el desarrollo, contribuir a él y disfrutar de él, incluidos los aspectos económicos, sociales, culturales o políticos, es decir, la persona humana debe ser el sujeto central, participante y beneficiario en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, el derecho al desarrollo no solo es un derecho humano en sí mismo, sino que también es necesario para la plena realización de todos los otros derechos humanos (ONU, 2018), lo que nos evidencia la interdependencia que existe entre ellos.

El marco jurídico internacional de los derechos humanos¹², aplicables a cualquier persona, independientemente de su condición jurídica, se configura como una herramienta fundamental para la protección de los refugiados ambientales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema y base fundamental del ordenamiento jurídico mexicano. Dicha ley, establece los derechos y obligaciones de las y los gobernados, así como la forma de gobierno, la división de poderes y las atribuciones de cada uno de estos.

En este contexto, el 10 de junio de 2011 fue un hito en materia de Derechos Humanos en México, toda vez que se realizaron modificaciones en la constitución en la materia. Dichas reformas, constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno e imponen la obligación de conocer, aplicar y observar el marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos.

De esta manera, la Constitución incluye en el título primero capítulo primero: “De los derechos humanos y sus garantías”, en su artículo primero, un reconocimiento expreso de los derechos humanos contenidos tanto en la propia carta magna como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

¹² Entendidos como aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna (ONU, s/f), <https://www.un.org/es/global-issues/human-rights>

Al mismo tiempo, el numeral estipula que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con una serie de principios. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2014):

a) El principio de universalidad: deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

b) El principio de interdependencia consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos necesariamente impacta en otros derechos.

En el entendido de que por esta interdependencia unos derechos tienen efectos sobre otros, se debe tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales.

c) El principio de Indivisibilidad indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.

d) El principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso, es decir, los derechos pueden aumentar, pero no disminuir.

Asimismo, el texto constitucional refiere que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De aquí que se desprendan otros dos principios importantes:

a) El principio pro- persona: atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Cabe mencionar la trascendencia de este principio que tiene su origen en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, que ha sido definido como:

un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar a favor del hombre. (Pinto, 1997:163).

b)El Principio de Interpretación Conforme: refiere que cuando se interpreten las normas constitucionales se puedan utilizar las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas.

Así, los tratados internacionales desempeñan una función subsidiaria que complementa a la norma constitucional, sin que ello signifique la derogación o desaplicación de una norma interna, ni su subordinación a la norma internacional.

Vale la pena considerar que basados en los principios de progresividad y pro- persona, las personas y las comunidades que se ven obligadas a abandonar sus hogares por motivos ambientales tendrían la posibilidad de solicitar refugio en nuestro país atendiendo a los Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México sea parte.

Basándonos en la clasificación de los DDHH realizada por Aguilar (2006), los derechos de solidaridad tienen como base principal la cooperación internacional, es la colaboración en las relaciones internacionales de los actores internacionales: Estados, organismos internacionales públicos o privados, organismos no gubernamentales, empresas e individuos. Son derechos que la comunidad internacional identifica y exige, son derechos relacionados con la supervivencia de las sociedades humanas en lo colectivo y del ser humano en lo individual. (Carpizo,2012:21).

La importancia que revisten los derechos de solidaridad radica en que abarcan un conjunto de derechos, como se enuncia a continuación:

1. Derecho a la paz: Entendido no solo como la ausencia de guerra, sino también como a puesta en marcha de procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos.
2. Derecho al Desarrollo: Referido a modelos y estructuras económicas que, además de generar beneficios propios, permitan el acceso a servicios básicos y garanticen la sostenibilidad del planeta
3. Derecho a un medio ambiente sano: Todas las personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles.
4. Derecho a la autodeterminación de los pueblos: el que tienen los países de determinar libremente su condición política y su modelo social y económico.
5. Derecho al disfrute del patrimonio cultural de la humanidad: Alude al acceso a los bienes de tipo material e inmaterial que constituyen un legado de especial relevancia para comprender la evolución humana (ACNUR, 2017)

En definitiva, hoy día al hablar de movilidad humana por cuestiones ambientales, tendríamos que considerar una política más humanista, sobre todo bajo un enfoque de derechos humanos, puesto que la degradación ambiental vulnera DDHH, por lo que deberíamos de construir una infraestructura institucional más sólida e inclusiva.

Es por ello, que un marco jurídico efectivo requiere que los Estados (de origen y receptores) aseguren el ejercicio y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con independencia de su situación migratoria (Felipe *et al*, 2019: 18). Es por ello, que en este apartado se abordará de manera más amplia el marco institucional y legal en materia de derechos humanos en México.

Retomando los avances jurídicos planteados en la reforma de DDHH, para el caso de los refugiados ambientales, aparte del derecho al medio ambiente sano, Viveros y Godínez (2016) sostienen que el cambio climático y los desastres naturales afectan el disfrute de los siguientes derechos humanos:

a) El derecho a la vida. (artículo 1 Constitucional) Constituye naturalmente, el más fundamental de los derechos humanos, se encuentra ampliamente protegido por los diversos instrumentos internacionales pues reviste un carácter fundamental ya que su salvaguarda es una condición esencial para el disfrute de otros derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos¹³ lo consagra en su artículo 3, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹⁴ en su artículo 6, la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹⁵ lo reconoce en su artículo 4 y la Convención sobre los Derechos del Niño¹⁶ en su artículo 6.

Este derecho implica no sólo la protección a la existencia, sino también supone el acceso a las condiciones que garanticen una vida con la cualidad de digna. A mayor abundamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que “... este derecho comprende [...] también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten [al ser humano] el acceso a una existencia digna”

En Filipinas, el tifón Yolanda se cobró la vida de casi 10.000 personas en 2013. Los golpes de calor están entre los efectos más mortíferos. La ola de calor de Europa de 2003 se cobró la vida de 35.000 personas. No obstante, hay muchas otras formas menos visibles en las que el cambio climático pone en peligro la vida. La Organización Mundial de la Salud prevé que el cambio climático provoque 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050 por malaria, malnutrición, diarrea y golpes de calor (Amnistía Internacional, 2019).

b) El derecho a la salud: (artículo 4º Constitucional) La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como el “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Precisamente el derecho a la salud implica el disfrute de ese bienestar a través de una

¹³ Aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948

¹⁴ Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, en vigor internacional a partir del 23 de marzo de 1976. México lo ratificó el 23 de marzo de 1981 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981

¹⁵ Adoptada el 22 de noviembre de 1969, en vigor internacional a partir del 18 de julio de 1978. México se vinculó el 24 de marzo de 1981 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981

¹⁶ Adoptada el 20 de noviembre de 1989, en vigor internacional a partir del 2 de septiembre de 1990. México la ratificó el 21 de septiembre de 1990 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.

alimentación y una nutrición adecuadas, una vivienda apropiada, agua potable salubre, un saneamiento adecuado, y un medio ambiente sano.¹⁷

De acuerdo con la OMS, la crisis climática y sus consecuencias tendrán un impacto directo en la salud de la población, dicha organización prevé que:

“entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico:” (OMS, 2017, p.25)

Al mismo tiempo, sostiene que existen grupos vulnerables que sufrirán estas consecuencias en mayor medida: las mujeres, los niños, las personas ancianas y empobrecidas o los pueblos indígenas, entre otros.

A nivel mundial, desastres naturales como las sequías, las inundaciones y las tormentas; u otras consecuencias para la salud en las que influye el clima, como la desnutrición y el paludismo, se cobran la vida de un número mayor de mujeres que de hombres” (OMS, p.25)

c) El derecho al agua: (Artículo 4° Constitucional) La Asamblea General de las Naciones Unidas también se pronunció a favor de la protección de este derecho. El 28 de julio de 2010, aprobó la resolución A/RES/64/292, por la cual reconoció que “...el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

La combinación de factores como la fusión de la nieve y el hielo, la reducción de la pluviosidad, el aumento de la temperatura y la elevación del nivel del mar muestran que **el cambio climático afecta y seguirá afectando a la calidad y cantidad de los recursos hídricos**, lo que agravará el problema del acceso a agua potable, del que actualmente carecen 1.100 millones de personas. Los fenómenos meteorológicos extremos, como los ciclones y las inundaciones, afectan a las infraestructuras de abastecimiento de agua y de saneamiento, y dejan tras ellos aguas contaminadas (Amnistía Internacional, 2019).

Aunado a ello, la dificultad de acceso al agua y la mala calidad del recurso serán cada vez mayores debido a las consecuencias del calentamiento global. Esto traerá consigo múltiples consecuencias, tales como: el incremento del tiempo dedicado a la búsqueda de agua y a potabilizarla; la disminución de la producción de alimentos; menor higiene y aumento de enfermedades; el cese de actividad educativa; o el aumento del acoso sexual y violaciones a mujeres perpetrados durante su trabajo por obtener agua. (Maraña y Otero, 2020, p.32).

d) El derecho a una alimentación adecuada. (Artículo 4° Constitucional)

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a la alimentación y la protege contra el hambre. Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo

¹⁷ ECOSOC, Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Núm. 12. E/C.12/1999/5, 12 de mayo de 1999. Nueva York, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1999, párrafo 8

refiere a la alimentación como uno de los componentes para alcanzar un nivel de vida adecuado.

La crisis climática ya está generando problemas en algunas comunidades para alimentarse, y todos los datos indican que esto irá creciendo en los próximos años. En este sentido, se prevé que las consecuencias climáticas generarán una merma de la seguridad alimentaria, afectando el acceso a alimentos y la estabilidad de los precios. Siguiendo al Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cultivos como el trigo, el arroz y el maíz se verán afectados, tanto en las regiones tropicales como en las templadas.

La agricultura, ganadería y pesca son actividades que presentan una alta vulnerabilidad frente a la crisis climática, debido a que depende directamente de las condiciones ambientales, que definen en gran medida los niveles productivos y de calidad (FAO, 2016).

El impacto de la crisis climática en la productividad agrícola se traducirá en reducciones entre el 3% y el 16% del volumen de las cosechas (Duran *et al*, 2012). Vistos estos efectos en la agricultura, es posible anticipar que la crisis climática tendrá efectos significativos en el derecho a la alimentación y en la seguridad alimentaria.

e) El derecho a una vivienda adecuada (Artículo 4° Constitucional)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce este derecho. Así lo hace también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11, adicionando la cualidad de “adecuada”.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, lo que incluye el acceso a una vivienda adecuada. No obstante, el cambio climático amenaza nuestro derecho a la vivienda de diversas formas. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y los incendios, ya están destruyendo viviendas y obligando a muchas personas a desplazarse.

Las sequías, la erosión y las inundaciones también pueden modificar el medio ambiente con el tiempo, mientras que la elevación del nivel del mar amenaza los hogares de los millones de personas de todo el mundo que viven en territorios a escasa altitud (Amnistía Internacional, 2019)

Las viviendas ubicadas en las cercanías de los ríos no escapan a los daños a causa del desbordamiento de los cuerpos de agua. Tan sólo durante el 2010, en México se reportaron cerca de 100 mil viviendas afectadas por las intensas lluvias e inundaciones y si a ello se suman los hogares dañados a causa de ciclones tropicales, la cifra supera los 200 mil inmuebles (CENAPRED, 2012).

Otra de las consecuencias del cambio climático sobre el derecho a la vivienda es la migración rural a zonas urbanas, motivada por la merma de los medios de subsistencia en el campo tales como la producción agrícola. El arribo de mayor población a las ciudades trae como consecuencia su traslado a asentamientos informales ubicados generalmente en zonas peligrosas.

Como podemos visualizar el derecho humano al desarrollo implica una interdependencia de los otros derechos humanos, es decir, existe un vínculo muy cercano

entre ellos, razón por la cual es necesario entender la importancia de respetarlos y hacerlos valer, lo cual representa un gran reto para los Estados.

4. Desafíos de la movilidad humana ambiental: Experiencia latinoamericana

A lo largo de la investigación hemos manifestado que la movilidad humana por razones ambientales (exponenciado por el cambio climático) es ya una realidad, como consecuencia, las interrogantes ante tal situación se resumen en los siguientes cuestionamientos, ¿Qué medidas preventivas pueden ser tomadas por el gobierno de México (tomando la experiencia de otros países) ?, ¿Cómo se ha preparado la comunidad internacional ante la movilidad humana por cuestiones ambientales?

En un mundo globalizado como el que vivimos, queda claro que el Estado ya no es el único actor en el sistema internacional, el surgimiento de nuevos actores no estatales: sociedad civil, movimientos sociales, organizaciones internacionales, evidencia la transición de un sistema de cooperación estado- céntrico hacia uno multicéntrico.

Es por ello, que la acción colectiva se convierte en una guía para que el Estado (a través de sus instituciones), las empresas y la sociedad trabajen de forma coordinada para asumir la responsabilidad de diseñar políticas públicas en aras de proteger a esta población desplazada por cuestiones ambientales.

Tomando en consideración que, si bien el cambio climático afecta a nivel mundial, es América Latina¹⁸ la región donde sus efectos se hacen más intensos, esto derivado de lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), reconoce:

En ella se encuentra alrededor del sesenta por ciento de la vida terrestre del planeta, junto a una diversa flora y fauna marina y de agua dulce. Los biomas de la región ALC varían desde humedales y ecosistemas costeros a desiertos, bosques tropicales, extensas praderas de sabana y hábitats andinos de gran altitud. En particular, los bosques de tierras bajas son de los más abundantes de la Tierra en diversidad de especies, y los bosques montañosos y páramos de los Andes albergan una amplia gama de especies endémicas y de distribución reducida. (División de Derecho Ambiental y Convenios sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2016).

En esa misma tesitura, Pajares (2020) reconoce la vulnerabilidad a la que se enfrentan los países latinoamericanos:

la región sufre de manera muy perceptible el cambio climático. El incremento de los huracanes en Centroamérica y Caribe es quizás el aspecto más conocido [...], huracanes como el Matthew (2016), el Harvey (2017) y otros del Atlántico norte y de cómo se han ido batiendo los récords de intensidad y estragos (p.182).

¹⁸ Para fines de esta investigación nos enfocaremos en América Latina ya que por razones de ubicación geográficas y culturales consideramos útil enfocarnos en este continente para fortalecer los marcos de cooperación internacional y regional.

Es así como podemos mencionar que los países en desarrollo son más vulnerables a vivir los efectos del cambio climático, ejemplo de ello, en Centroamérica hay una reducción progresiva de las precipitaciones, especialmente en el Corredor Seco (que abarca partes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), lo que está perjudicando gravemente a la agricultura. Se da una tendencia general hacia un volumen menor de lluvia anual, pero con fuertes lluvias al inicio de la temporada que tienen mucha capacidad destructiva (World Bank, 2018:10).

Bajo ese orden de ideas, América Latina ha adoptado una serie de medidas para regular la problemática, para ejemplificar lo dicho, exploraremos las acciones que en la región se han llevado a cabo.

La experiencia en la región latinoamericana nos ayuda a entender el gran compromiso que han asumido por establecer un marco de cooperación entre la región, al respecto Yamamoto (2019:428) argumenta que la gran diversidad de fenómenos ambientales que se han suscitado en Perú, Argentina y Bolivia han obligado a adoptar medidas legales para mitigar la problemática.

En Sudamérica se ha demostrado que la migración ambiental es una realidad, así lo podemos observar por la gran diversidad de fenómenos que se han suscitado en Perú, Argentina, Bolivia y Brasil que han derivado en la adopción de medidas para mitigar la problemática. Las estadísticas de la Plataforma sobre Desplazamientos por Desastres en América del Sur puntualizan que de enero a junio a 2019, las inundaciones en la cuenca del Amazonas y del Río de la Plata provocaron 400, 000 nuevos desplazamientos en Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay. (PPD, 2020, p.3). Además, en Sudamérica, por ejemplo, ya se empieza a desarrollar un entramado de la acción colectiva.

el desarrollo de una estrategia regional en materia de migraciones en el contexto de desastres y cambio climático pasa por la adopción de una serie de documentos de referencia, como: el Marco de Acción de Sendai y su Agenda 2015-2030 para la reducción del riesgo de desastres; la Agenda Nansen/Plataforma sobre Desplazamientos por Desastres (2015- 2016) para la protección de las personas desplazadas a través de fronteras en el contexto de desastres, que hace recomendaciones sobre la prevención y la gestión de estos desplazamientos, identifica prácticas e instrumentos para la protección de los desplazados y mecanismos para la cooperación entre Estados de la misma región; los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (PNUD, 2015), que establecen metas y recomendaciones en materia de reducción de riesgo de desastres, cambio climático y migraciones; la Cumbre Humanitaria Mundial (2016), que propone una Agenda 2030 para la humanidad integrando la respuesta a desastres y cambio climático y a los desplazamientos que provocan; el Acuerdo de París (UNFCCC, 2015) adoptado durante la COP21, que incorpora los desplazamientos provocados por el cambio climático en norma vinculante. (Pires, 2016:56)

Otra cuestión para resaltar en este apartado es el último informe de la ONG Germanwatch, titulado Índice de Riesgo Climático Global (IRC) 2021,¹⁹ indica el nivel de exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos:

Los países en desarrollo se ven particularmente afectados por los efectos del cambio climático. Son los más afectados por los efectos del cambio climático porque son más vulnerables a los efectos perjudiciales de un peligro, pero tienen una menor capacidad para hacerle frente. Ocho de los diez países más afectados por los efectos cuantificados de los fenómenos meteorológicos extremos en 2019 pertenecen a la categoría de ingresos bajos a medios-bajos. La mitad de ellos son países menos adelantados (Germanwatch, 2021, p.2).

Con base en este Informe, se muestran los países más afectados en el 2019, en materia de riesgo climático.

Tabla I. El índice de Riesgo Climático Global para el año 2019: Los diez países más afectados

Ranking 2019 (2018)	País	Valor IRC	Muertos	Muertos por 100000 habitantes	Pérdidas en millones de dólares (PPA)	Pérdidas por unidad PBI en %	HDI (Índice de Desarrollo Humano 2020)
1	Mozambique	2,67	700	2, 25	4 930.08	12, 16	181
2	Zimbabue	6.17	347	2.33	1 836.82	4.26	150
3	Las Bahamas	6.50	56	14.70	4 758.21	31.59	58
4	Japón	14.50	290	0.23	28 899.79	0.53	19
5	Malawi	15.17	95	0.47	452.14	2.22	174
6	República Islámica de Afganistán	16.00	191	0.51	548.73	0.67	169
7	India	16.67	2 267	0.17	68 812.35	0.72	131
8	Sudán del Sur	17.33	185	1.38	85.86	0.74	185
9	Níger	18.17	117	0.50	219.58	0.74	189

¹⁹ Para más información Véase: <https://germanwatch.org/sites/default/files/Resumen%20Indice%20de%20Riesgo%20Clim%C3%A1tico%20Global%202021.pdf>

10	Bolivia	19.67	33	0.29	798.91	0.76	107
----	---------	-------	----	------	--------	------	-----

Referencia: Tomada de Eckstein D., Künzel V. y Schäfer L. (2021), índice de Riesgo Climático Global, Germanwatch, p.3. <https://germanwatch.org/sites/default/files/Resumen%20Indice%20de%20Riesgo%20Clim%C3%A1tico%20Global%202021.pdf>

La clasificación que realiza Germanwatch califica el impacto de los eventos (tormentas, inundaciones, sequías, etc), sobre los países basados en el número absoluto de muertos, número de muertos por cada 100 000 habitantes, pérdidas totales en dólares y pérdidas en proporción del Producto Interno Bruto (PIB), así como el costo relativo de acuerdo con el nivel de prosperidad del país y donde se observa que Bolivia se encuentra dentro del listado de países más vulnerables.

Aunado a lo anterior, también es necesario tomar en cuenta el índice de Gestión de Riesgos para América Latina y El Caribe (INFORM- LAC)²⁰ considerada una herramienta para comprender y evaluar el riesgo de desastres y crisis humanitarias en los países de la región, el cual se calcula combinando 82 indicadores que miden tres dimensiones: amenaza y exposición, vulnerabilidad y falta de capacidad de afrontamiento. Los resultados de esta herramienta se pueden sintetizar en la siguiente tabla:

Tabla II. Vulnerabilidad y falta de capacidad de afrontamiento entre países con exposición a amenazas humanas y naturales

FALTA DE CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO	Alto / Muy Alto	El Salvador Jamaica	Nicaragua República Dominicana Bolivia	Guatemala Honduras Haiti
	Medio		Ecuador Perú México	Colombia
	Muy Bajo / Bajo	Brasil Belice Cuba		
		Muy bajo / bajo	Medium	Alto / Muy Alto
		VULNERABILITY		

²⁰ Es un enfoque para abordar el análisis de una forma coordinada entre diferentes actores que permita obtener una visión consensuada del riesgo. La implementación de INFORM implica trabajar en conjunto y compartir datos y habilidades entre sectores, para llegar a conclusiones comunes que puedan orientar la planificación de las acciones para reducir el riesgo de desastre y crisis humanitaria, construir la resiliencia de las personas y prepararse mejor para responder ante las crisis. Véase: <https://www.unicef.org/lac/media/1601/file>

Referencia: Tomada de INFORM- LAC (2018), Índice de Gestión de Riesgos para América Latina y El Caribe, p.10.

La tabla identifica que Guatemala, Haití y Honduras son los países que presentan los niveles más altos en las dimensiones de vulnerabilidad y falta de capacidad de afrontamiento; Colombia se encuentra en los niveles más altos de la dimensión de vulnerabilidad, mientras que cae en el nivel medio de la dimensión de falta de capacidad de afrontamiento; Nicaragua, República Dominicana y Bolivia se encuentran en los niveles más altos de la dimensión de falta de capacidad de afrontamiento, mientras que presentan un nivel medio de vulnerabilidad; El Salvador y Jamaica se ubican en los niveles más altos de falta de capacidad de afrontamiento, mientras que presentan niveles más bajos de vulnerabilidad; mientras que Ecuador, México y Perú se encuentran en los niveles medios de la dimensión de vulnerabilidad y la falta de capacidad de afrontamiento y por último Brasil, Belice y Cuba se ubican en un nivel medio de vulnerabilidad y falta de capacidad de afrontamiento.

De este modo, se hace visible las afectaciones y riesgos a los que se enfrentan los países latinoamericanos ante las emergencias climáticas, por lo que ha sido necesaria la creación de normas nacionales y la inclusión de desplazamiento ambiental en sus leyes migratorias y el establecimiento de políticas públicas para garantizar los derechos de los migrantes ambientales. Tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla III. Políticas de los países latinoamericanos relativas a la migración ambiental			
País	Ley	Artículo	Definición aceptada
Bolivia	Ley de Migración N°370, 2013	Art. 65. El Consejo Nacional de Migración promoverá la suscripción de convenios y acuerdos Internacionales en temas de cambio climático y medioambiental con los diferentes Estados, para la protección de bolivianos y bolivianas afectados; asimismo, coordinará las políticas públicas que viabilicen, de ser necesario, la admisión de migrantes climáticos.	Migrante climático: Grupos de personas que se ven obligados a desplazarse de un Estado a otro por efectos climáticos, cuando existe riesgo o amenaza a su vida, sea por causas naturales, desastres medioambientales, nucleares, químicos o hambruna
Argentina	Reglamentación de la Ley de Migraciones 25871 y sus	Art. 24.- Los extranjeros que ingresen al país como “residentes transitorios” podrán ser admitidos en las subcategorías establecidas por el artículo 24 de la Ley N°	

	<p>modificatorias (2010). Decreto 616/ 2010 Art. 24, inciso (h)</p>	<p>25.871, con los siguientes alcances: (...) h) Especiales: para los casos en que se justifique un tratamiento especial, la Dirección Nacional de Migraciones podrá dictar disposiciones de carácter general que prevean los recaudos a cumplimentar para ser admitidos como residentes transitorios especiales. Asimismo, se tendrá en cuenta la situación de aquellas personas que, a pesar de no requerir protección internacional, transitoriamente no pueden retornar a sus países de origen en razón de las condiciones humanitarias prevalecientes o debido a las consecuencias generadas por desastres naturales o ambientales ocasionados por el hombre. A este fin podrán tomarse en cuenta las recomendaciones de no retorno que formule el ACNUR.</p>	
Perú	<p>Decreto Legislativo de Migraciones N°1350 (2017), Art. 29.2 (k). Decreto supremo 007-2017-IN, Art.91</p>	<p>Artículo 29. Tipos de Calidades Migratoria. (...) 29.2. Residencia: Autoriza el ingreso y/o residencia en el territorio de la República. Estas Calidades Migratorias son prorrogables y permiten múltiples entradas. Las Calidades Migratorias de Residencia son las siguientes: (...) k. Humanitaria Para el extranjero que encontrándose en territorio nacional y sin reunir los requisitos para acceder a la condición de asilado o</p>	

		<p>refugiado, se encuentre en situación de gran vulnerabilidad o peligro de vida en caso de abandono del territorio peruano o para quien requiere protección en atención a una grave amenaza o acto de violación o afectación de sus derechos fundamentales. Del mismo modo, será aplicable para refugio y asilo o para quienes hayan migrado por motivos de desastres naturales y medioambientales; o para quienes han sido víctimas de trata o tráfico de personas; o para niñas, niños y adolescentes no acompañados, o para apátridas.</p> <p>También se aplica para personas que se encuentren fuera del territorio nacional en situaciones excepcionales de crisis humanitaria reconocida internacionalmente, que soliciten venir al Perú y obtener protección. Permite realizar actividades lucrativas de manera subordinada, autónoma o por cuenta propia.</p> <p>Es otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el plazo de permanencia es de ciento ochenta y tres (183) días. Pudiendo mantenerse en tanto persistan las condiciones de vulnerabilidad por las cuales se otorgó la calidad migratoria.</p>	
Brasil	<p>Ley N°13445 (2017), Art.30; Decreto N°9199(2017), Art. 142 y 145</p>	<p>Residencia humanitaria (por dos años renovable).</p> <p>La residencia se puede autorizar, tras el registro, a un inmigrante, residente en la frontera o visitante</p>	

		<p>con base en consideraciones humanitarias (acogida humanitaria). Al expirar el período de residencia determinado, la institución que concedió la autorización inicial de residencia puede, a petición del inmigrante, renovar el período inicial durante más dos años o conceder la residencia por un período indefinido.</p> <p>La autorización de residencia temporal con base en la acogida humanitaria puede otorgarse a una persona apátrida o un nacional de cualquier país que se encuentre en una situación de desastre ambiental. Una decisión conjunta del ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro de Trabajo establecerá los requisitos para autorizar la residencia basada en el terreno de recepción humanitaria, para la renovación del período de residencia y para su extensión por tiempo indefinido.</p>	
Cuba	Art. 80, D-5 (b) del Reglamento de la Ley de Migración, de 1978	Define como parte de la clasificación migratoria “residente temporal “, la subclasificación “refugiado”, prevista para las personas que tienen que abandonar su país debido a calamidad social, bélica, cataclismos u otros fenómenos de la naturaleza, y necesitan “la hospitalidad y albergue “de la República de Cuba hasta tanto desaparezcan las causas que motivaron la salida de su país, o sea,	

		establece explícitamente una suerte de condicionamiento temporal. Esta subclasificación migratoria fue asignada a los refugiados haitianos que solicitaron asilo en Cuba entre 1991 y 1994, los cuales fueron asistidos por el ACNUR en un proyecto de integración local.	
Ecuador	Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017)	<p>Artículo 58.- Personas en protección por razones humanitarias. Es la persona extranjera que, sin cumplir los requisitos establecidos en la presente Ley para acceder a una condición migratoria, demuestra la existencia de razones excepcionales de índole humanitaria por ser víctima de desastres naturales o ambientales.</p> <p>La persona podrá acceder a una visa humanitaria por un lapso de hasta dos años de conformidad con el reglamento de esta Ley, siempre y cuando no sean considerados una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano.</p> <p>Transcurrido este tiempo, de persistir las razones por las cuales solicitó la visa humanitaria, esta se podrá prorrogar hasta que cesen los motivos que dieron origen a la concesión de la visa, sin perjuicio de que en cualquier momento y previo al cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley pueda acceder a otra condición migratoria.</p>	

Guatemala	Decreto 44-2016 Código de Migración	Artículo 68. Ingreso de personas por razones humanitarias. a) Por catástrofe natural en los países vecinos, que obliga a las personas o grupo de personas a salvar sus vidas b) Por emergencias médicas (...) c) Por razones de conflictos armados, de acuerdo al derecho internacional.	
Panamá	Decreto Ejecutivo 34 (1999)	Protege a ciudadanos nicaragüenses que, a raíz del Huracán Mitch que azotó Nicaragua, se encontraban en Panamá irregularmente.	
Venezuela		Para el caso de ciudadanos haitianos existen visas humanitarias desde el terremoto de enero de 2010.	

Referencia: Adaptada con datos del ACNUR (s/f). Buenas prácticas: Opciones migratorias para víctimas de desastres naturales, <https://www.acnur.org/buenas-practicas.html> y la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (s/f), Lineamientos regionales en materia de protección y asistencia a personas desplazadas a través de fronteras y migrantes en países afectados por desastres de origen natural, pp.53-55. https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2019/06/CSM-Lineamientos-regionales-personas-desplazadas-por-desastres_compressed.pdf

Si bien los países latinoamericanos han reconocido la relación existente entre migración, cambio climático y desastres naturales, sólo Bolivia ha incluido en su marco normativo la figura de migrante climático, y recordemos que este país es considerado por el índice de riesgo climático global como uno de los países más afectados. No obstante, es de reconocer que al menos el tópico ya este inmerso en la agenda pública, lo cual representa un gran avance para estar preparados debido a un desastre natural repentino.

Al mismo tiempo, otra cuestión a resaltar del marco normativo en la región latinoamericana es el gran compromiso que han asumido por establecer un marco de cooperación entre la región, sin embargo, no hay que obviar que aún existe un mapa incompleto de cooperación en el sistema internacional, puesto que todavía hay brechas significativas que acotar en relación con la participación de naciones desarrolladas por reconocer el fenómeno de la migración ambiental.

Sin embargo, hay que destacar que los países de la región latinoamericana han decidido hacer frente a la crisis de refugiados a través de la cooperación internacional, y de los instrumentos firmados y ratificados por los Estados, como es el caso de las respuestas regionales que intentan México y Centroamérica, con la finalidad de gestionar los flujos

migratorios desarrollando el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica²¹ o la Agenda 2030 como mecanismo de cooperación internacional que lidera nuevas formas de cooperación y colaboración para abordar los nuevos riesgos globales, sin dejar a un lado los temas tradicionales como el comercio, la integración económica y la seguridad.

Se puede incluir aquí como ejemplo el terremoto de 2010 en Haití, el cual dio pauta para que se incrementará la movilidad transfronteriza de haitianos hacia el exterior. En ese contexto, Brasil y México se establecieron como estados receptores aplicando marcos jurídicos en materia de refugiados como respuesta a estos movimientos transfronterizos, aunado a que los instrumentos regionales de refugiados eran aplicables, lo cual evidencia que los marcos jurídicos en materia de refugiados se convierten en buenas prácticas que figuran en las respuestas de los Estados de destino a fin de dar base sólida a las recomendaciones con el objetivo de fortalecer las respuestas a nivel nacional, regional e internacional.

5. Desafíos sobre refugio ambiental. Caso México

Para el caso mexicano, aún no se logra establecer en la agenda pública la temática de los refugiados ambientales. No obstante, se reconoce que en materia de lucha contra cambio climático, México fue el primer país en Latinoamérica en crear una Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de 2012, y que dentro de sus objetivos establece: garantizar el derecho a un medio ambiente sano, transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono, Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas frente a los efectos adversos del cambio climático y garantizar la coordinación y transversalidad entre órdenes de gobierno y dependencias de la Administración Pública Federal, con transparencia y participación corresponsable de la sociedad.

Además de que nuestro país ha enfatizado la importancia de alinear sus planes y programas a la Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mismos que establecen metas y recomendaciones en materia de reducción de riesgo de desastres, cambio climático y migraciones y donde se ha evidenciado que la Agenda solicita a los Estados que refuercen la cooperación internacional para garantizar una migración segura, ordenada y regular con respecto a los derechos humanos de los migrantes, destacando la vulnerabilidad de los migrantes, refugiados y desplazados internos.

En este contexto, la ONG Refugees International avocada a la protección de las personas desplazadas ha identificado áreas de oportunidad para el fortalecimiento institucional en materia migratoria, realizando una serie de recomendaciones a nivel federal

²¹ El objetivo de este Plan es crear un espacio de desarrollo sostenible y de oportunidades a nivel local de manera articulada entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México, para mejorar la calidad de vida de la población, bajo una visión integral que atienda el ciclo migratorio y permitiendo así que la migración sea una opción y no una obligación. Las propuestas se organizan en 4 pilares estratégicos: a) desarrollo económico, b) bienestar social, c) sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático, y d) gestión integral de ciclo migratorio. <https://www.cepal.org/es/comunicados/salvador-guatemala-honduras-mexico-reafirman-su-compromiso-plan-desarrollo-integral>

al gobierno de México y Estados Unidos, así como a las diferentes organizaciones en materia de refugio para que el sistema de protección para estas personas garantice un trato digno y de respeto a sus derechos humanos.

Dentro de las principales observaciones, Schmidtke (2020) , reconoce las siguientes:

Tabla IV. Recomendaciones para el fortalecimiento institucional en materia de refugio		
INSTANCIA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN
Gobierno México	Establecer un comité de supervisión externo del INM	<ul style="list-style-type: none"> El INM necesita mecanismos externos de supervisión y rendición de cuentas. Un comité de supervisión independiente establecido por el Gobierno Federal mexicano podría desempeñar este papel, centrándose en particular en prácticas que podrían ir en contra del Derecho mexicano e internacional en materia de protección de solicitantes de asilo. El comité independiente colaboraría con la sociedad civil. Esta supervisión también debe centrarse en la protección de los derechos humanos de todos los migrantes de México.
INM	<ol style="list-style-type: none"> Colgar materiales informativos para explicar la opción de solicitar asilo en lugares visibles dentro de las estaciones migratorias. <ul style="list-style-type: none"> Garantizar la expedición de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias a todos los migrantes que cumplan los criterios para entrar en México por razones humanitarias, es decir, solicitantes de 	<p>Carteles, folletos y otros materiales de comunicación son ejemplos de medios para transmitir a los migrantes detenidos información sobre su derecho a solicitar asilo. Estos materiales deben traducirse a los idiomas más hablados por los migrantes: francés, inglés, kiché y mam.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante la provisión de un mayor acceso a este documento, más personas podrán obtener servicios esenciales y reducir su riesgo de vulnerabilidad. El INM también debe adaptar sus requisitos legales y prácticos para entrar en México por razones humanitarias y garantizar que aquellos que necesitan protección internacional y asistencia humanitaria tengan acceso legal al territorio mexicano. La presencia de un funcionario de la COMAR en estos espacios en los

	<p>asilo, apátridas o las personas que huyan por causas de fuerza mayor o interés público.</p> <p>3. Permitir la presencia de un funcionario de la COMAR en los puntos de ingreso aéreos de México, tal y como recomienda el Plan Nacional del MIRPS.</p> <p>4. Permitir que las organizaciones de la sociedad civil accedan a los centros de detención</p>	<p>aeropuertos permite a las personas que tienen intención de solicitar asilo en México iniciar los trámites de inmediato, sin riesgo de ser devueltas.</p> <p>4. Se debe permitir a los interlocutores de la sociedad civil ingresar a las estaciones migratorias para ofrecer y prestar servicios de asesoría y representación legal a las personas migrantes detenidas. Este acceso puede ayudar a garantizar que los migrantes conozcan su derecho a solicitar protección internacional si así lo desean, y dotar de mayor transparencia a los procedimientos de detención del INM.</p>
COMAR	<p>1. Ampliar los criterios para la transferencia de solicitudes de asilo a distintos estados.</p> <p>2. Permitir una mayor flexibilidad a la hora de evaluar el plazo de 30 días para presentar la solicitud.</p> <p>3. Crear un protocolo para entrevistas telefónicas con normas basadas en los criterios de la pandemia de ACNUR para las entrevistas de elegibilidad.</p> <p>4. Avisar con tiempo suficiente para la</p>	<p>1. . La COMAR debe permitir a los solicitantes de asilo que desean mejorar sus condiciones socioeconómicas, trasladarse a estados distintos del estado de solicitud de asilo, y autorizar la transferencia de las solicitudes a otro estado. Esto se puede hacer incluyendo los motivos económicos como razones que permitan la transferencia. La COMAR también debe ser más flexible en cuanto a las pruebas que acepta para justificar un cambio por razones de seguridad.</p> <p>2. Para los solicitantes de asilo que no cumplen el plazo de 30 días, la COMAR debe realizar un análisis más flexible para permitir que el solicitante de asilo sea admitido al procedimiento.</p> <p>3. . La COMAR debe crear un protocolo oficial para las entrevistas telefónicas que sea acorde con las normas que ACNUR recomienda para las entrevistas de elegibilidad en persona. Estos criterios</p>

	<p>entrevista de elegibilidad.</p> <p>5. Mejorar la coordinación entre la COMAR y el INM en la expedición de Constancias.</p> <p>6. Atención temprana para casos de alto riesgo</p>	<p>deben garantizar que el solicitante de asilo tenga acceso a un espacio privado para la entrevista y que se invierta tiempo suficiente para recoger los detalles necesarios para la solicitud de asilo.</p> <p>4. La COMAR debe notificar al solicitante de su entrevista de elegibilidad como mínimo con una semana de antelación, para que los solicitantes de asilo puedan informar a sus representantes legales y puedan prepararse para la entrevista.</p> <p>5. Para asegurarse de que se expidan de manera oportuna la COMAR debe notificar de inmediato al INM que se ha expedido una Constancia para facilitar la expedición posterior de la tarjeta de visitante por razones humanitarias por parte del INM. También debe eliminarse su renovación cada 45 días, dada la gran cantidad de tiempo que tardan en resolverse las solicitudes de asilo.</p> <p>6. Los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador deben recibir atención inmediata o temprana en las zonas fronterizas para detectar casos en los que las normas de la Declaración de Cartagena pudieran aplicarse fácilmente. Esto simplificaría el proceso de asilo, ya que las entrevistas de elegibilidad se harían antes y los criterios se determinarían más rápido para lograr una tramitación más ágil de los casos en los que el solicitante de asilo sea de alto riesgo y tenga muchas probabilidades de recibir el asilo</p>
ACNUR	<p>Incorporar las mejoras recomendadas al INM y a la COMAR en el Plan Anual de México para 2021 del Marco</p>	<p>1. El Plan Anual del MIRPS establece las prioridades, los compromisos y las acciones para que cada país mejore sus sistemas de protección internacional. A través del MIRPS, ACNUR puede apoyar al</p>

	<p>Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS). Continuar trabajando con las organizaciones de la sociedad civil para impartir capacitaciones al INM</p>	<p>Gobierno mexicano en la aplicación de los cambios prácticos descritos en este informe con la asistencia técnica y financiera necesaria, junto con los mecanismos de supervisión y evaluación, con vistas a garantizar la puesta en marcha de las acciones aquí recomendadas.</p> <p>2. ACNUR también debe impartir capacitaciones periódicas al INM junto con otras organizaciones de la sociedad civil sobre procedimientos adecuados de admisión de solicitudes de asilo en estados donde no hay presencia de la COMAR; así como en brindar información precisa a las personas migrantes detenidas sobre el derecho al asilo y otros aspectos procedimentales relacionados con el ejercicio de este derecho</p>
<p>Gobierno de los EU</p>	<p>Transformar las políticas estadounidenses en materia de protección y asilo en la frontera sur de EU. Ampliar el financiamiento para ayudar a aplicar estas mejoras procedimentales. Retirar las campañas de presión para obligar a México a intensificar los controles</p>	<p>1.El gobierno estadounidense ha intentado erradicar en la práctica el asilo en la frontera sur para las personas que huyen de la persecución. Un giro de la política estadounidense hacia el respeto por los derechos humanos de los solicitantes de asilo tendría un efecto sustancial y significativo sobre la política interior de EU en materia de asilo exceden el ámbito de este informe, es importante reconocer su importancia crítica.</p> <p>2. Estados Unidos debe seguir reforzando el sistema de inmigración mexicano y su apoyo al MIRPS con financiamiento adicional al sistema de asilo de México. Este financiamiento no debe sustituir la restauración del propio sistema de asilo de los Estados Unidos, sino complementar la transformación de las políticas estadounidenses en materia de protección y fomentar los objetivos de responsabilidad compartida del MIRPS.</p>

	<p>3. La influencia de Estados Unidos es incuestionable en el aumento de la voluntad de México de detener y deportar migrantes antes de que tengan la ocasión de solicitar asilo. Los Estados Unidos deben trabajar con México como socio en la gestión de la migración regional, en lugar de trasladarle las responsabilidades.</p>
--	--

Referencia: Schmidtke, R. (2020). Un nuevo camino a seguir: refuerzo del contexto de protección en México. Refugees International. <https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/12/1/un-nuevo-camino-a-seguir-refuerzo-del-contexto-de-proteccion-en-mxico>

A partir de esta tabla, se pueden retomar aspectos que pueden incidir en buenas prácticas al interior del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados, lo cual permitiría brindar asistencia y protección a las poblaciones afectadas cuando la migración forzosa realmente ocurre en situaciones de cambio ambiental y climático, y buscar soluciones duraderas a su situación.

Después de entender que hoy día, el escenario en el que se desenvuelve la migración contemporánea tiene como factores de expulsión: crisis políticas, conflictos violentos, socioeconómicos, factores internacionales y ambientales, resulta primordial reconfigurar el tema migratorio desde una perspectiva multidisciplinaria, es decir, desde una mirada más amplia que permita a las ciencias económicas, políticas y sociales ofrecer un análisis macro sobre los flujos migratorios, movimientos migratorios temporales, políticas migratorias de los países expulsores y receptores, entre otros, para estar a la altura de los desafíos emergentes globales.

De tal manera que nosotros consideramos urgente seguir tanto en una conceptualización crítica como en maneras metodológicas sistémicas que integren la dificultad del fenómeno de la movilidad humana ambiental, y contribuyan no solamente a conocerlo sino a legitimarlo por medio de su integración en el ordenamiento socio-jurídico de nuestro país, lo que no únicamente constituye un aporte al conocimiento científico en las ciencias sociales, sino que también este conocimiento evidencia la necesidad política de que los Estados, y especialmente México, se vean forzados a desarrollar normatividad y políticas públicas que a partir de una visión garantista de derechos, busque defender y restituir las condiciones elementales para una vida digna y segura de los individuos sometidos a esta problemática.

Por tal motivo proponemos que se integre a la legislación migratoria mexicana la figura de Refugiado ambiental, en los términos siguientes:

Se entenderá como refugiado ambiental a la persona extranjera que, sin cumplir los requisitos establecidos en la ley para acceder a una condición migratoria, demuestra la existencia de razones que ponen en peligro su vida y su dignidad, por ser víctima de desastres naturales o ambientales, derivados del cambio climático.

Lo anterior, tendrá como consecuencia la modificación de la Ley de Migración y de Ley sobre refugio en los artículos que se refieran a las calidades migratorias y requisitos para acceder a ser un refugiado ambiental.

Así, corresponderá al INM promover las políticas públicas que viabilicen, de ser necesario, la admisión de poblaciones desplazadas por efectos climáticos, cuando exista riesgo o amenaza a la vida, y sean por causas naturales o desastres medioambientales, nucleares, químicos o hambruna

Toda vez que las circunstancias por las que atravesamos actualmente, derivado del terremoto en Haití y los embates del Huracán Grace nos dan cuenta de la imperante necesidad de contar con iniciativas que permitan dar soluciones a las personas extranjeras que buscan protección internacional en los países más cercanos.

Bajo ese orden de ideas, los temas relacionados con riesgos globales: como la seguridad, el cambio climático, las migraciones, la estabilidad económica internacional, involucran demandas de gobernanza cuya resolución no dependen exclusivamente del Estado, sino requieren de la cooperación internacional, de ahí la creación de la Agenda 2030, o acuerdos regionales o internacionales para avanzar hacia la consecución de estrategias globales para solucionar problemas globales.

6. Conclusiones

En primer lugar, consideramos que el paradigma de desarrollo ha ido evolucionando de tal manera que es evidente hoy día reconocer de manera urgente que el cambio climático es una amenaza para la seguridad humana.

En ese sentido y considerando que el Estado es el principal responsable de proteger a los refugiados ambientales, se hace indiscutible la idea de evolucionar de una política migratoria securitista hacia una política migratoria humana donde se reconozca que la movilidad humana por motivos ambientales es consecuencia de las limitaciones de los Estados a la hora de abordar de manera adecuada los efectos del cambio climático o de desastres naturales.

El segundo apartado de las conclusiones se enfoca en dejar claro la interdependencia entre Derechos Humanos y el desarrollo, confirmando que los derechos humanos son universales y que comprometen a los Estados a garantizar el derecho al desarrollo y los derechos humanos correlacionados: la vida, salud, medio ambiente sano, entre otros.

Finalmente, el capítulo establece que, ante el fenómeno de los refugiados ambientales, América Latina es una región altamente vulnerable a los desastres naturales relacionados con el cambio climático, razón por la cual la cooperación internacional es necesaria para enfrentar la problemática.

Para el caso mexicano, consideramos urgente fortalecer las instituciones migratorias y ambientales que les permitan establecer un engranaje institucional capaz de crear acciones tendientes a implementar medidas que garanticen la seguridad y el respeto de los Derechos Humanos de los extranjeros que soliciten refugio por cuestiones ambientales, respetando el principio de no devolución.

Referencias

- ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) (s/f). *Buenas prácticas: Opciones migratorias para víctimas de desastres naturales*, <https://www.acnur.org/buenas-practicas.html>
- Amnistía Internacional (2019). ¿Qué es el cambio climático y cómo afecta a los seres humanos? España. <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/cambio-climatico/>
- CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres). *Características e impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana en el año 2010*. Serie: Impacto socioeconómico de los desastres en México. México, Secretaría de Gobernación, 2012, p. 24.
- Conferencia Suramericana sobre Migraciones (s/f), *Lineamientos regionales en materia de protección y asistencia a personas desplazadas a través de fronteras y migrantes en países afectados por desastres de origen natural*, pp.53-55. https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2019/06/CSM-Lineamientos-regionales-personas-desplazadas-por-desastres_compressed.pdf
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
- CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) (2016). Derecho Humano al Desarrollo. México, p. <https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/folleto-DH-Desarrollo.pdf>
- CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) (2014). Principios Constitucionales en materia de Derechos Humanos. http://cedhj.org.mx/principios_constitucionales.asp
- División de Derecho Ambiental y Convenios sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2016). El estado de la biodiversidad en América Latina y del Caribe: Una evaluación del avance hacia las metas de AICHI para la diversidad biológica. Cambridge: UNEP.
- Durán, G. y Sánchez Á. (2012). Cambio climático y derecho a la alimentación. P.33
- Eckstein D., Künzel V. y Schäfer L. (2021). Índice de Riesgo Climático Global, Germanwatch, p.3.

- FAO (2016): Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional. América Latina y el Caribe. <http://www.fao.org/3/a-i6311s.pdf>
- INFORM- LAC (2018), Índice de Gestión de Riesgos para América Latina y El Caribe, p.10.
- Jongitud, J. (2001) El derecho al desarrollo como derecho humano: entre el deber, el ser y la necesidad, pp. 215- 235
- Jongitud, J y Montalvo, M. (2020). *Del desarrollo al derecho humano al desarrollo. Notas sobre su evolución y medición* en Transformaciones de los conceptos claves en distintas áreas del conocimiento jurídico- social, p.52
- Landa, I. y Román, A. (2021). La Agenda 2030, directriz del nuevo ciclo globalizador y de la administración pública en América Latina, capítulo 2. Ed. Porrúa Print, México, p. 60
- Mañan, Oscar (2010). Revisitando el desarrollo: los nuevos imaginarios son desafíos civilizatorios, Revista Problemas del Desarrollo, 162(41), julio- septiembre, pp.5-30.
- Maraña, M. y Otero, J. (2020). Crisis climática. Amenaza a los Derechos Humanos (2020)-UNESCO Etxea. Centro UNESCO del País Vasco.p.31. https://www.unescoetxea.org/dokumentuak/crisis_climaticaDDHH.pdf
- Mayor, F. (2019). *Reflexiones para el futuro*. Margarita Alfaro (ed. lit.), Silvia Arias Careaga (ed. lit.), Ana Gamba Romero (ed. lit.) En Agenda 2030. Claves para la transformación sostenible. Madrid. p. 7- 11.
- ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2018). Relator de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo. Una introducción al mandato. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/SR/SRRightDevelopment_IntroductionMandate_SP.pdf
- Oficina del alto Comisionado de los Derechos Humanos. (1986). Declaración sobre el derecho al desarrollo. <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx>
- OMS (Organización Mundial de la Salud) (2017): El cambio climático y sus consecuencias para la salud en los pequeños Estados insulares en desarrollo.
- PDD (Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres) (2020), Una iniciativa liderada por los Estados con miras a brindar una mejor protección para las personas desplazadas a través de fronteras en el contexto de desastres y cambio climático, p. 4. <https://www.refworld.org/es/pdfid/5e586ee44.pdf>
- Pajares, M. (2020). Refugiados climáticos. Un gran reto del siglo XXI. Primera edición. Rayo verde editorial. Barcelona. 271 pp.

- Pinto, M. (1997). “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos” en *La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales.
- Pires, E. et al (2018). La migración ambiental en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular: desafíos y aportes para América Latina y el Caribe- Informe de posición n. 1.
https://www.researchgate.net/publication/311765043_Migracion_medio_ambiente_y_cambio_climatico_agenda_2030
- Reyes, G. (2001). Principales teorías sobre el desarrollo económico y social. *Nómadas*, núm. 4. Universidad Complutense de Madrid, España. ISSN: 1578-6730
- Schmidtke, R. (2020). Un nuevo camino a seguir: refuerzo del contexto de protección en México. *Refugees International*. <https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/12/1/un-nuevo-camino-a-seguir-refuerzo-del-contexto-de-proteccion-en-mxico>
- Vasak, K. (1990). Les différentes catégories des Droits de l’Homme, en *Les dimensions universelles des Droits de l’Homme*, UNESCO- Bruylant, Bruxelles, pp.297-316
- Viveros, T. y Godínez, R. (2016). Cambio climático y derechos humanos. Carmona, J coord. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México. P. 19- 27
- World Bank (2018). *Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration*, <https://reliefweb.int/report/world/groundswell-preparing-internal-climate-migration>
- Yamamoto, L., (2019). La migración ambiental en la Agenda 2030 en los países de Sudamérica: Argentina, Bolivia y Perú en: *Migraciones en las Américas*, Colegio de México, México, 443 pp.